REVISTA **RED** pensar

Evolución del concepto de desarrollo rural en la política pública internacional y nacional

Evolution of the concept of rural development in international and national public policy
Evolução do conceito de desenvolvimento rural nas políticas públicas internacionais e nacionais

Carlos Alberto Bolaños Céspedes - María Fernanda Corrales Solís

Revista REDpensar, volumen 9, número 2, Julio-Diciembre 2020
ISSNe: 2215-5384

REDpensando en la Investigación 2
Recibido: 25 de agosto de 2020
Aceptado: 11 de setiembre de 2020

DOI: 10.31906/redpensar.v9i2.207

Universidad De La Salle Costa Rica
Departamento de Investigaciones

redpensar@ulasalle.ac.cr | www.redpensar.ulasalle.ac.cr

Evolución del concepto de desarrollo rural en la política pública internacional y nacional

Evolution of the concept of rural development in international and national public policy

Evolução do conceito de desenvolvimento rural nas políticas públicas internacionais e nacionais

Carlos Alberto Bolaños Céspedes¹
María Fernanda Corrales Solís²

Resumen

El presente artículo tiene por objeto analizar el origen de las políticas públicas en materia de desarrollo rural, con el fin de precisar su contenido, alcance e importancia en las sociedades latinoamericanas y especialmente la costarricense. Se realiza un análisis histórico-jurídico del concepto, hasta su aplicación en diferentes realidades. En tal sentido, se hace un acercamiento desde las políticas públicas de los Estados Unidos de América, su implementación en la normativa de la Unión Europea y su evolución a partir del sistema internacional de protección de los derechos humanos al desarrollo y al ambiente, y su conjunción en el concepto de desarrollo sostenible. Se continúa este acercamiento con la incorporación de las políticas de desarrollo rural en el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), a través de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial. Finalmente, se analiza su recepción en el sistema jurídico costarricense, con especial atención en los cambios que provoca en la forma en que se regula y desenvuelve la agricultura en Costa Rica y la institucionalidad relacionada con el desarrollo rural, en particular el Instituto de Desarrollo Rural (INDER). Por último, este análisis jurídico y conceptual, nos permitirá delinear el concepto actual del desarrollo rural, su alcance y sobre todo su importancia en la construcción de territorios rurales más desarrollados, inclusivos y generadores de riqueza social y calidad de vida para sus habitantes.

Palabras clave: DESARROLLO RURAL, DERECHO AGRARIO, POLÍTICAS PÚBLICAS, RURALIDAD, SOSTENIBILIDAD.

Abstract

The purpose of this article is to analyze the origin of public policies on rural development, in order to specify their content, scope and importance in Latin American societies and especially in Costa Rica. A historical-legal analysis of the concept is carried out, until its application in different realities. In this sense, an approach is made from the public policies of the United States of America, its implementation in the regulations of the European Union and its evolution from the international system of protection of human rights to development and the environment, and its conjunction in the concept of sustainable development. This approach continues with the incorporation of rural development policies in the Central American Integration System (SICA), through the Central American Strategy for Rural Territorial Development. Finally, its reception in the Costa Rican legal system is analyzed, with special attention to the changes it causes in the way in which agriculture is regulated and developed in Costa

1. Costa Rica. Dr. en Derecho, con tesis de graduación en Derecho Forestal y Desarrollo Sostenible. Universidad Escuela Libre de Derecho. Costa Rica.

Especialista en Derecho Agrario de la Universidad de Costa Rica. Correo electrónico: cabolanos@ulasalle.ac.cr

2. Costa Rica. Abogada Senior Departamento Jurídico EcosShrimper, Costa Rica. Consultora Legal Agroindustrial y Asesora Ambiental. Actualmente cursa Maestría en derecho ambiental y economía del cambio climático en FLACSO, Argentina. Correo electrónico: agroambientalcr@gmail.com

Rica and the institutional framework related to rural development, in particular the Rural Development Institute (INDER, in spanish). Finally, this legal and conceptual analysis will allow us to outline the current concept of rural development, its scope and, above all, its importance in the construction of more developed, inclusive rural territories that generate social wealth and quality of life for its inhabitants.

Keywords: RURAL DEVELOPMENT, AGRARIAN LAW, PUBLIC POLICIES, RURALITY, SUSTAINABILITY.

Resumo

O objetivo deste artigo é analisar a origem das políticas públicas de desenvolvimento rural, a fim de especificar seu conteúdo, abrangência e importância nas sociedades latino-americanas e especialmente na Costa Rica. É realizada uma análise histórico-jurídica do conceito, até sua aplicação em diferentes realidades. Neste sentido, faz-se uma abordagem a partir das políticas públicas dos Estados Unidos da América, sua implementação na regulamentação da União Europeia e sua evolução desde o sistema internacional de proteção dos direitos humanos ao desenvolvimento e ao meio ambiente, e sua articulação no o conceito de desenvolvimento sustentável. Esse enfoque continua com a incorporação das políticas de desenvolvimento rural ao Sistema de Integração Centro-Americana (SICA), por meio da Estratégia Centro-Americana de Desenvolvimento Territorial Rural. Por último, analisa-se sua recepção no ordenamento jurídico costarricense, com especial atenção às mudanças que provoca na maneira de regular e desenvolver a agricultura na Costa Rica e no marco institucional relacionado com o desenvolvimento rural, em particular o Instituto de Desenvolvimento Rural (INDER, em espanhol). Finalmente, esta análise jurídica e conceitual nos permitirá delinear o conceito atual de desenvolvimento rural, o seu alcance e, acima de tudo, a sua importância na construção de mais desenvolvidos, territórios rurais inclusivos que geram riqueza social e qualidade de vida para seus habitantes.

Palavras chave: DESENVOLVIMENTO RURAL, DIREITO AGRÍCOLA, POLÍTICAS PÚBLICAS, RURALIDADE, SUSTENTABILIDADE.

Introducción

Los territorios rurales en Costa Rica y en mayor o menor medida en América Latina presentan importantes asimetrías en relación con los territorios urbanos. A pesar de ser los primeros más ricos en recursos naturales, en diversidad humana, tradición y cultura y en general más extensos que los territorios urbanos, presentan grados de pobreza mayor que los territorios urbanos. Las posibilidades y al acceso a la educación, al empleo y en general a una mejor calidad de vida son más limitadas en las zonas rurales en relación con las zonas urbanas.

Los fenómenos de migración a las ciudades han sido una constante, que ha despoblado el campo y ha generado miseria en las ciudades. Las actividades productivas asociadas a la ruralidad, especialmente la agricultura, han sido mal retribuidas, lo que ha generado descontento social, resistencia y protesta. No en vano la mayoría de los movimientos de guerrilla en América Latina surgieron en el campo y paradójicamente, hoy las nuevas expresiones populistas de derecha tienen un fuerte apoyo en territorios rurales, que sienten el abandono de las grandes ciudades y del *establishment*.

No es la pretensión de este artículo analizar las causas multidimensionales de este fenómeno, sino, contribuir a precisar la forma en que las políticas públicas y la normativa asociada, han tratado de responder a este fenómeno acompañando su evolución hasta el momento presente.

Nos interesa sobre todo observar como el objeto de esas políticas ha evolucionado y se ha reformulado hasta la actualidad, tomando como referencia la normativa internacional hasta llegar al caso costarricense en específico. Nuestro enfoque es jurídico, siguiendo la teoría tridimensional del jurista brasileño Miguel

Reale, quien entiende que la norma jurídica expresa una respuesta a hechos de la realidad, bajo ciertos valores o axiología y se convierte en normatividad jurídicamente vinculante respaldada por el poder coactivo del Estado (Cano, 2010). No es tampoco pretensión de este artículo profundizar en el valor dialéctico de la teoría científica del profesor Reale, más bien, superar el enfoque puramente normativista y descriptivo, para el caso concreto de las normas y políticas de desarrollo rural, al tratar de entender el momento en el que se emiten dichas normas y los valores sociales que privaban en esa realidad histórica y con ello entender el impacto que pudieron haber tenido en la sociedad.

En las políticas públicas estadounidenses: *the country life movement*.

No existe una única definición de desarrollo rural, sino diferentes conceptos y contenido del término de acuerdo con el uso que se le ha dado en distintos momentos de la historia y según el campo del conocimiento al que se ha aplicado. Calatrava (2017) ubica el origen del uso del concepto en las políticas generadas en los Estados Unidos con la aparición del *Country Life Movement* (CLM, por sus siglas en inglés), a inicios del siglo XX. Este se trató de un movimiento social preocupado por mejorar el nivel de vida de las zonas rurales que atrajo a grupos heterogéneos, ligados a las actividades agrarias desde las ciudades y motivados unos por la preocupación del estado de atraso de las comunidades rurales de los Estados Unidos y otros por un espíritu de recuperación del papel clave que tenía la ruralidad en la sociedad estadounidense.

En agosto de 1908, la influencia creciente de este movimiento condujo a la creación, por parte del presidente Roosevelt, de una comisión asesora denominada *Country Life Comission* (CLC, por sus siglas en inglés), que en 1909 concluyó el *Report of the Country Life Comission to the President* (Calatrava, 2017), el cual planteaba que el problema de las poblaciones rurales era su falta de organización para aprovechar sus propios recursos, generar riqueza y mejorar su calidad de vida. En ese documento, se insta al Departamento de Agricultura del país, a coordinar con las universidades dedicadas al tema agrícola al desarrollo de programas.

La conclusión de aquella época se presenta como válida en la actualidad cuando observamos que, en nuestros territorios rurales la mayoría de las empresas agrarias y rurales son pequeñas y medianas, y, no tienen la capacidad de investigar e innovar. Además, requieren apoyo para generar nuevas ideas y aprovechar el potencial de los territorios rurales, casi siempre más extensos y ricos que las áreas urbanas. Las sugerencias del informe y las que generaron las experiencias de desarrollo regional y de comunidades rurales posteriormente influenciaron las políticas para aliviar la crisis generada por la depresión económica mundial de 1932, en el contexto del *New Deal*. Además, tuvo ecos importantes en las políticas de extensión agraria en Europa e incluso en la Unión Soviética³, según indica Calatrava (2017).

Posteriormente, el reporte fue retomado por Eisenhower para lanzar, en 1955, un ambicioso programa de desarrollo rural (*Rural Development Program*) que, aunque tenía un enfoque sectorial, pues estaba dedicado a la mejora de vida de agricultores y sus familias, se traducía en una mejora de la calidad de vida rural. Se afirma que, es con ese programa que se institucionalizó por primera vez el uso del término desarrollo rural.

A partir de los años 60, se empezó a cuestionar en los Estados Unidos el concepto de que lo rural es sinónimo de agrario. Se afirmó que, lo rural ya no era lo agrario para destacar lo que se consideraba una necesidad: construir la *non farm rural América*. Las zonas rurales que se dedican a la agricultura se asociaban con economías primitivas o tradicionales; según la explicación en boga de economistas con formación capitalista, que explican el desarrollo como un proceso que ubica a la agricultura como una actividad primaria, que con sus excedentes es precursora del desarrollo moderno, principalmente urbano e industrial, y que al acelerarse absorbe la mano de obra rural, deja empobrecidas y despobladas las zonas rurales.

3. A propósito de estudios de Chalanov, sobre economía campesina.

Este sector moderno continúa incrementándose hasta que llega a un punto de cierta saturación y de pérdida de los hábitats de vida, lo que genera un proceso de revalorización de lo rural y de los elementos de vida en los pueblos. Esto propicia una demanda de servicios de la ruralidad que moviliza recursos hacia esas zonas hasta que convierten el sector tradicional en un sector moderno. A esta teoría se le denomina el paradigma de expansión del núcleo capitalista. Evidentemente, el impulso de esas teorías correspondía con un enfoque industrial que requería de la mano de obra rural.

Al margen de la pertinencia de este enfoque, este permite comprender algunas políticas públicas de naturaleza anti agrarista que se empezaron a impulsar no solo en Estados Unidos, sino, en nuestro subcontinente, de la mano de agencias internacionales y bancos que también perfilaron en esa época la separación de lo rural como diferente de lo agrario, sobre todo a través de lo que se llamó en los esos años el desarrollo rural integrado. Sin embargo, recientemente se comprende que en los territorios rurales lo que es importante es el aprovechamiento de la multifuncionalidad de la propiedad agraria, entendida como la capacidad de aprovechar todos los servicios que brindan los terrenos rurales para el desarrollo de actividades productivas, de servicios ambientales, de encadenamientos verticales y horizontales, tanto en actividades agrícolas como auxiliares y no agrícolas.

En efecto, en América Latina es evidente que las políticas modernizadoras que se impulsaron a partir de los años 60's con la Alianza para el Progreso, diseñada en la Conferencia de Punta del Este de 1961, estaban influenciadas por esta visión de que las actividades tradicionales en el campo latinoamericano, con su grado de atraso, propiciaban el desarrollo de revoluciones comunistas al estilo de la revolución cubana. Por esto, los esfuerzos de las agencias de cooperación y de los bancos se concentraban en propiciar un modelo de industrialización de corte urbano.

En las políticas agrarias de la Unión Europea

Otros autores ven el desarrollo rural como un producto de la evolución de las políticas agrarias, desde el Mercado Común hasta la actual Unión Europea. Este proceso inició con la firma del Tratado de Roma el 25 de marzo de 1957 que impulsa la formación de un Mercado Común europeo. En el tratado, aunque no hay referencias específicas al tema del desarrollo rural, si hay menciones a una política agraria común que favorezca el desarrollo y resuelva los desajustes regionales internos.

En 1962, la Unión Europea creó el mercado único para la agricultura para garantizar a los consumidores alimentos accesibles y a los agricultores ingresos proporcionales a su trabajo (Comisión de la Unión Europea, citada en Red Extremeña de Desarrollo Rural [Redex], s. f.). El escenario era la preocupación por la producción agraria y alimentaria, por lo que, aún tenía un carácter sectorial, pues se veía a la actividad agraria como la principal del mundo rural. A partir de entonces se crearon varios planes, como el Plan Mansholt de 1968 para la reforma de las estructuras agrarias y posteriormente, en 1986 la llamada Acta Única, con participación de doce Estados, que estableció los fundamentos del Mercado Único Europeo.

Para desarrollar el Acta Única, se firmó el Reglamento (CEE) 4253/88 del Consejo de la Comunidad el 19 de diciembre de 1988, en el que por primera vez se incorpora el término desarrollo rural, para promover zonas rurales residuales, con un enfoque más territorial, pues aludía al desarrollo y ajuste estructural de regiones menos favorecidas. No obstante, no fue sino hasta la Agenda 2000 que se crearon dos pilares en la Política Agrícola Común (PAC) el primero de ellos con medidas agrarias (llamadas ayudas directas y medidas de regulación de mercado y el segundo con medidas de desarrollo rural financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Rural [Feader]). Los documentos de la Unión Europea actual entienden el desarrollo rural como:

Proceso de revitalización equilibrado y autosostenible del mundo rural basado en su potencial económico social y medioambiental mediante una política regional y una aplicación integrada de medidas con base territorial por parte de las organizaciones participativas. (Redex, s. f., párr.4)

Esos objetivos se pretendían conseguir a través de la llamada Metodología Leader, que es una estrategia que tiene como base la composición de un grupo promotor, denominado grupo de acción local o grupo de desarrollo rural, interesado en un área geográfica, cuya misión es promover y apoyar iniciativas para el desarrollo (Redex, s. f.). A partir del año 2014, Leader ha evolucionado al concepto desarrollo local participativo (DLP).

En la actualidad los objetivos estratégicos a largo plazo para la Política de Desarrollo Rural del período 2014-2020 son tres (Comisión Europea, s.f, párr.3):

- Aumentar la competitividad de la agricultura.
- Garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima.
- Lograr un desarrollo territorial equilibrado de las economías y comunidades rurales incluyendo la creación y conservación de empleo.

Es interesante observar cómo en la política comunitaria europea la PAC se compone de los dos pilares, por un lado, la política agraria y por otro, la política de desarrollo rural. En realidad, la dimensión de lo rural ha enriquecido la visión agraria con los componentes: territorial, social y ambiental. El desarrollo rural, al contrario de lo que pensaban los economistas de los años 60's y 70's, no puede dejar de tener la agricultura y sus actividades conexas y auxiliares como unos de los componentes más ricos de los territorios rurales. Además, es importante observar la evolución, por la dimensión ambiental, de la actividad agraria y de desarrollo rural cada vez más presente en las estrategias de la PAC.

Concepto de desarrollo sostenible: evolución de los derechos humanos al desarrollo, al ambiente; conjunción y dimensiones

A partir de los años 70's, se presenta en el mundo la emergencia de la crisis ambiental. Fue en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano (Conferencia CNUMAH, 1972, p.2), celebrada en Estocolmo en 1972, en la que se sentaron las bases del Derecho Ambiental Internacional y se emitieron 26 principios sobre el medioambiente, un plan de acción con 109 recomendaciones y una resolución. Los principios esbozan lo que después se conocería como el concepto de desarrollo sostenible.

- **Principio 1:** el hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar y, tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras. A este respecto las políticas que promueven o perpetúan el apartheid, la segregación racial, la discriminación racial, la discriminación, la opresión colonial y otras formas de opresión y de dominación extranjera quedan condenadas y deben eliminarse.
- **Principio 2:** los recursos naturales de la tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante cuidados, planificación u ordenación, según convenga.

Esta Conferencia, aunque marcó un hito, no tuvo el impacto deseado en las políticas internacionales y nacionales y el ambiente continuó deteriorándose aceleradamente. Por lo tanto, la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo (CMMUD), publicó en el año 1987 el informe “El Desarrollo Sostenible: una guía para nuestro futuro común”, elaborado por la Comisión Mundial de Medio Ambiente, conocido como “Informe Brundtland”. En este documento se afirmaba:

El desarrollo sostenible satisface las necesidades del presente sin comprometer nuestra capacidad para hacer frente a las del futuro, se trata de una política cuyo núcleo es una planificación a largo plazo. Este desarrollo significa reconocer que, si deseamos tener acceso continuo a los recursos que posibilitan la vida y si hemos de expandir los beneficios del progreso industrial, tenemos que estar conscientes de las limitaciones que suponen tomar ese derrotero. Los problemas de la pobreza y el subdesarrollo no pueden resolverse a menos que forjemos una nueva era de crecimiento en la que los países en desarrollo desempeñen una función más preponderante y cosechen mayores beneficios. No puede proseguir indefinidamente el progreso a largo plazo de los países industriales en desarrollo, si no se toman en cuenta los fundamentos ecológicos del desarrollo. Si se destruyen o se dañan los recursos naturales, el desarrollo económico, social y político se estancará y por último empezará a decaer. (Lebel y Kane, 1991, p.2)

Por lo tanto, es posible observar que el desarrollo sostenible contiene dos conceptos clave (Lebel y Kane, 1991, p.3):

- El concepto de las necesidades, en particular las esenciales de las personas pobres del mundo.
- La idea de las limitaciones que impone el ambiente a la tecnología y la sociedad y, en general, el ambiente para satisfacer las necesidades mencionadas.

Además, recalcan

El desarrollo sostenible supone que se satisfagan las necesidades fundamentales de todos y que se amplíen las posibilidades de que todos puedan colmar sus aspiraciones a una vida mejor; pero también implica aspiraciones a una vida mejor; pero también requiere la aceptación de que los niveles de consumo deben ceñirse a los límites de las posibilidades ecológicas y a los que todos puedan aspirar. Por consiguiente, las políticas que tienen por objeto hacer frente a las necesidades humanas mediante la realización del potencial pleno del desarrollo deben: a) incrementar la capacidad de producción y al tiempo ampliar las posibilidades de llegar a un progreso equitativo; b) garantizar que el crecimiento demográfico guarde armonía con los sistemas naturales de soporte que posee la Tierra. (Lebel y Kane, 1991, p.3)

De este texto, surgió el resumen del concepto que después fue desarrollado en la Conferencia de Río, a través de la Declaración sobre Medio Ambiente y Desarrollo y un programa de acción conocido como la Agenda XXI (Asamblea de Naciones Unidas, 1992, párr.10). En varios de los principios de la declaración se esboza el concepto de desarrollo sostenible:

- **Principio 3:** El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras.
- **Principio 4:** A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medioambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada.
- **Principio 5:** Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea esencial de erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible a fin de reducir las disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo.

Dimensiones del desarrollo sostenible

Es importante tener claro que el desarrollo sostenible involucra dimensiones económicas, ecológicas y sociales y culturales, las cuales pueden definirse a partir de Müller (1996, p.5) como:

- **Sostenibilidad ecológica:** El ecosistema mantiene sus principales características que son fundamentales para la supervivencia a largo plazo.
- **Sostenibilidad económica:** El manejo sostenible de los recursos naturales produce una rentabilidad que hace atractiva su continuación.
- **Sostenibilidad social:** Los beneficios y costos de la administración del sistema se distribuyen equitativamente entre los diferentes grupos y generaciones y se obtiene un grado de satisfacción de las necesidades que hace su continuación posible.

Se han agregado dimensiones como la cultural y la institucional, aludiendo a la sostenibilidad de nuestras culturas y a la existencia necesaria de una institucionalidad que haga posible el desarrollo sostenible. Lo importante es indicar que, todas ellas deben estar estrechamente vinculadas, pues sería cuestionable conservar a ultranza los recursos naturales si la población vive en la miseria o no se beneficia de ese desarrollo. A fin de cuentas, se trata de garantizar la supervivencia del ser humano como centro del sistema (Principio 1 de la Declaración de Río), pero no en una posición de enemigo de la naturaleza, sino viviendo en forma armónica con ella. Como afirma Winograd (1994):

El desarrollo sostenible debe ser un proceso de cambio que permita la satisfacción de las necesidades humanas sin comprometer la base misma del desarrollo, es decir el medioambiente. El objetivo general de este proceso es lograr un desarrollo equitativo en lo económico, justo y participativo en lo social que reoriente y sea eficiente en lo tecnológico y finalmente que use y conserve el medio ambiente. (p.6)

Incorporación de concepto de desarrollo sostenible en el ordenamiento jurídico costarricense

En el ámbito constitucional

El papel y valor de las conferencias internacionales de Estocolmo y Río de Janeiro es indudable en la creación de las condiciones necesarias para la incorporación del concepto de desarrollo sostenible en nuestro ordenamiento jurídico. Además, es el sustrato de la resolución 3705-93 de la Sala Constitucional, que perfiló por primera vez los principios del Derecho Ambiental y derivó el derecho a un ambiente sano de los derechos fundamentales a la vida y la salud, previstos en el artículo 21 de la Constitución Política y también de los artículos 6, 69 y 89, relacionados con la protección de los recursos naturales en zona económica exclusiva, el uso racional de la tierra y la protección de las bellezas naturales. En otra sentencia, la 6322 del mismo año se perfiló lo que considera son esos principios.

Sin embargo, fue con la reforma del artículo 50, en el año 1994, que se incorporó el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Este menciona expresamente el concepto de desarrollo sostenible, pues cuando la Constitución señala que lo que se establece es el derecho a un ambiente equilibrado ecológicamente, no hace otra cosa que tutelar el derecho al desarrollo, pero que respete los límites al uso de los ecosistemas.

Como se puede observar no es la conservación absoluta lo que protege nuestra Constitución, sino, la idea de un desarrollo sostenible. Esto es evidente en el desarrollo del derecho de la Constitución que hará la Sala en sus sentencias posteriores. Por ejemplo, en el Voto 6222 (2010) se afirmó:

Sin embargo, ante la finalidad del interés general de la colectividad nacional se deben ponderar ambos derechos y equilibrar su utilización atendiendo a un principio de desarrollo humano sostenible, según el cual se reconoce la necesidad de una interrelación equilibrada entre los elementos críticos del desarrollo económico (turismo, inversión, empleo, infraestructura, finanzas sanas y sistema

tributario) de la política social (educación, salud, seguridad) y de la protección medioambiental. El propósito fundamental es la creación de un ámbito "posibilitante" en que todos puedan disfrutar de vidas largas, saludables y creativas, ya que el crecimiento económico también es un medio para el desarrollo humano. De ahí que lo relevante es permitir un desarrollo industrial y tecnológico de los pueblos, pero tolerable al utilizar el entorno físico y social, con el fin de lograr un progreso económico y social. La responsabilidad consiste en equilibrar la protección del ambiente, el desarrollo económico y las actividades de los particulares, que justifique la intervención del Estado. Ahora bien, es precisamente por la "vinculatoriedad" del ordenamiento ambiental, que la decisión no puede ser arbitraria y por ello la discrecionalidad de la Administración está condicionada al respeto del bloque de legalidad.

Recientemente, en el Voto 10450 (2013), que declaró inconstitucional la pesca de arrastre, se menciona un concepto de desarrollo sostenible democrático que hace hincapié en la dimensión social del desarrollo sostenible, frente a la creencia de que el mismo se refiere únicamente a un tema ambiental:

Se inferen los siguientes principios centrales de la Pesca y Acuicultura en los Estados del Istmo Centroamericano: el principio de desarrollo sostenible y más específicamente el principio de desarrollo sostenible democrático, los principios de prevención y precaución, el principio de solidaridad y de justicia social, y el principio de responsabilidad en la actividad pesquera y de acuicultura. En virtud del primero, le corresponde a Costa Rica (actividad pública y privada relacionada con la Pesca). Entre otras acciones, utilizar las artes o métodos de pesca que permitan aprovechar racionalmente los recursos marinos presentes, sin comprometer el pleno desarrollo de las generaciones futuras. Para lograrlo, deben hacer uso de los principios precautorio y preventivo, en aras de los cuales se tiende a disminuir o incluso eliminar el riesgo que para el logro de ese objetivo pueda ocasionar una actividad económica como la pesca del camarón por arrastre; para ello, deben atender a los conocimientos científicos disponibles y en caso de ausencia, considerar las medidas precautorias necesarias para garantizar a las generaciones futuras el pleno desarrollo. En la realización de esta actividad económica se tiene que tener presente la erradicación de la pobreza, por tanto, la distribución justa del ingreso proveniente de la actividad, la eliminación de discriminaciones fundadas en el género, y la generación de empleo decente donde se garantice la calidad de vida del sector (principio de solidaridad y justicia social).

En el ámbito legal

En el ámbito legal, el concepto de desarrollo sostenible también se incorpora en normas como el artículo 1 de la Ley 7575 (1996), en la que se contemplan como fines la preservación de los recursos forestales del país, pero también su aprovechamiento sostenible y elevar el nivel de vida de las poblaciones dedicadas a esa actividad. Por otro lado, los artículos 9 y 10 de la Ley 7788 (1998), contemplan como objetivo el uso sostenible de los recursos y la equidad intra e intergeneracional. Finalmente, en la Ley 7554 (1995) se establece como principio:

La utilización racional de los elementos ambientales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio nacional y la obligación de propiciar un desarrollo económico y ambientalmente sostenible entendido como el desarrollo que satisface las necesidades humanas básicas, sin comprometer las opciones de las generaciones futuras. (Artículo 2, párr.5)

El concepto de desarrollo sostenible aplicado a la agricultura en el marco del desarrollo rural

Evidentemente, la agricultura como actividad técnica, que comprende desde el punto de vista del Derecho Agrario las actividades agrarias de producción de vegetales y cría de animales para la producción de materia prima o de transformación en productos de origen agrario y los procesos asociados de comercialización, se ve afectada transversalmente por el concepto de desarrollo sostenible.

Zeledón (2015), señala que, a partir de la incorporación de este concepto, la agricultura no puede ser ni contaminante ni contaminada y los procesos de producción deben regirse por las dimensiones del desarrollo sostenible que involucran una sostenibilidad económica, social y ambiental. Por esto, cobran mayor relevancia conceptos como la función social de la propiedad ahora enriquecida con su función económica y ambiental (Ley 7788, 1998, artículo 8). El desarrollo sostenible no solo modifica la visión de una agricultura no contaminante ni contaminada, sino, la manera en la que se articulan todos los procesos relacionados con la producción y las actividades conexas como la industrialización y la comercialización, pues esos procesos deben corresponder a ese nuevo objeto.

La agricultura debe transformarse tanto horizontalmente (los procesos de asociación y colaboración entre productores) como verticalmente (los procesos de transformación, industrialización y comercialización, en la cadena productiva hasta el consumidor). En toda esa cadena deberá manifestarse el modelo del desarrollo sostenible, con su dimensión económica, social y ambiental, por lo que, deberá darse sustento a procesos de equidad intra e intergeneracional en cuanto a la distribución de los beneficios de la actividad agraria, así como promover formas de organización que generen esa equidad. Al respecto, son importantes las formas de organización asociativa de la producción y los procesos de transformación y comercialización. Deben generarse procesos de trazabilidad ambiental y social de las actividades agrarias, desde la finca hasta la mesa del consumidor y deberán sancionarse las que no cumplan con esos estándares.

Existen regulaciones jurídicas que propician una nueva agricultura, como la Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica o los reglamentos de buenas prácticas agrícolas y, en el ámbito de la salud, los nuevos requerimientos sobre el uso de agroquímicos, aunque aún queda mucho camino que recorrer. Asimismo, un tema importante es el suelo como un recurso natural fundamental, tanto en la producción como en la lucha contra el cambio climático.

Más allá del impacto profundo del desarrollo sostenible en la agricultura como actividad productiva, para lograr lo que los autores llaman esa «agricultura no contaminante ni contaminada», la aplicación del concepto se extendió al enfoque del entorno en el cual se desarrolla esa actividad, tanto en lo social de los territorios rurales (donde ha sido la principal actividad) como en lo económico. En lo social, la urgencia del desarrollo rural pasa por reconocer las graves desigualdades que se presentan entre la ciudad y el campo en cuanto a servicios, empleo, calidad de vida y oportunidades, lo que deriva en una mayor pobreza y exclusión y, en lo económico, en la búsqueda de alternativas para generar más riqueza, a veces con un énfasis en la generación de empleo y otras en la creación de una verdadera "empresarialidad" rural.

Como hemos visto con la experiencia europea y estadounidense, esa búsqueda de soluciones ha pasado por una visión de desarrollo agrario integrado o integral, que pretende dotar de servicios e instrumentos al campesino para hacerlo más competitivo en su agricultura y, en otras ocasiones, ha transitado por un cierto antia-grarismo al cual se le achaca el atraso. El campo se ha despoblado, tanto por la demanda de mano de obra en los polos industriales urbanos como por la falta de oportunidades en las zonas rurales.

Lo importante es, que la emergencia del concepto de desarrollo rural sostenible pone el acento no solo en la producción y sus derivaciones, sino, en el territorio rural como entorno en el cual se desarrollan actividades multifuncionales. La superación del anti agrarismo nos hace pensar que la actividad agraria se enriquece con otras actividades conexas y auxiliares, a través de la multifuncionalidad, ya no solo de la propiedad agraria,

sino de los propios territorios rurales.

El desarrollo rural sostenible se convierte entonces en una nueva dimensión del Derecho Agrario, a través del hecho político, que es el entorno en el cual la actividad agraria se desarrolla y a través del hecho técnico que convierte a la agricultura en una actividad más compleja, que debe integrar la dimensión ambiental explicada. Esta incluye la nueva ruralidad como fenómeno social en el que se desenvuelve la actividad agraria y su dimensión social que se traduce en una nueva empresarialidad rural de actividades productivas y de servicios.

Uno de los cambios más importantes que ha sufrido la agricultura en los últimos años es el entorno y las actividades que la nutren. Aun cuando la teoría de la actividad agraria del Derecho Agrario supera el concepto de lo rural como delimitador de lo agrario, pues, lo que califica en lo agrario es el desarrollo del ciclo biológico para la producción de vegetales y animales, lo cual puede presentarse, tanto en entornos urbanos como rurales. No es menos cierto que el fenómeno de la agricultura, como hecho técnico y político, está ligado con la ruralidad como espacio de construcción social, cultural y económica donde se desarrolla la actividad. Esto es lo que más ha cambiado en las últimas décadas, lo que enriquece la actividad agraria con nuevas actividades y nuevas relaciones sociales urbanas y rurales.

El rezago de los agricultores, su mundo y sus espacios ha derivado en la construcción de políticas públicas dirigidas a revitalizar y desarrollar esta actividad. La propiedad agraria y otros institutos del Derecho Agrario se nutren con nuevos conceptos que la enriquecen y que se instituyen en principios como la multifuncionalidad de la propiedad agraria, entendida como las posibilidades que ofrece para el desarrollo de actividades agrícolas y las conexas de transformación, industrialización, comerciales y las auxiliares relacionadas con servicios rurales, como el agroturismo, el turismo rural comunitario, la artesanía y, en general, los servicios ecosistémicos.

Otros institutos se transforman con la visión de desarrollo rural sostenible, como la empresa agraria, la contratación y, en el ámbito del derecho procesal agrario, la ampliación de la competencia de los tribunales agrarios con las actividades agroambientales y las derivadas del desarrollo rural.

Incorporación del concepto de Desarrollo Rural en la normativa del Sistema de Integración Centroamericana (SICA)

La región centroamericana y Costa Rica, en el marco de esa transformación conceptual, han escogido como modelo de desarrollo rural la visión territorial del desarrollo rural, explicada en la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial (ECADERT)⁴. En esta estrategia se concibe el desarrollo rural territorial como:

Desarrollo Rural Sostenible con Enfoque Territorial (DRSET) se concibe como un proceso que busca transformar la dinámica de desarrollo del territorio mediante una distribución ordenada de las actividades productivas, de conformidad con su potencial de recursos naturales y humanos. Tal perspectiva exige la puesta en marcha en el territorio de políticas económicas, sociales, ambientales y culturales sustentadas en procesos descentralizados y participativos, acordes a la heterogeneidad y realidades que subyacen en el territorio, articuladas por medio de una estrategia de desarrollo territorial. (Consejo Agropecuario Centroamericano, 2010, p.101)

4. La ECADERT fue aprobada en el ámbito ministerial el 12 de marzo del 2010 por parte del Consejo de Ministros del CAC (Consejo Agropecuario Centroamericano) y en el ámbito presidencial el 30 de junio del 2010, en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de Integración Centroamericano.

En sintonía con lo anterior, el objetivo de dicha Estrategia es

Generar un cambio en las bases económicas y en la organización social, a nivel territorial, que sea el resultado de la movilización de las fuerzas sociales organizadas, de manera que se aproveche su potencial. Eso implica crear nuevos mecanismos de acceso a las oportunidades sociales, fortalecer la viabilidad económica territorial, la capacidad de inversión y de gasto de las instituciones públicas, así como asegurar la conservación de los recursos naturales. (Consejo Agropecuario Centroamericano, 2010, p.101; citando a Sepúlveda, 2008, p.8)

Por otra parte,

El DRSET incorpora la agricultura, pero no se circunscribe a ella. Reconoce que la dinámica social y económica actual o previsible de los territorios rurales ya no depende solamente de la agricultura. Representa con mayor precisión la realidad del mundo rural latinoamericano, lo entiende como un espacio con múltiples actividades productivas agrícolas y no agrícolas, tales como la producción de artesanías, el turismo rural, los servicios ambientales y un sinnúmero de servicios de apoyo a los anteriores, así como a la producción agropecuaria. (Consejo Agropecuario Centroamericano, 2010, p.101; citando a IICA, 2000)

Se debe aclarar que ese proceso de reflexión centroamericana que plasmó en el concepto de desarrollo rural territorial, en Costa Rica se plasmó en forma paralela y no es necesariamente cierto que la ECADERT fue la que propició el cambio, aunque indudablemente lo potenció y enriqueció.

Incorporación del enfoque y concepto de desarrollo rural territorial en la Ley del Instituto de Desarrollo Rural (INDER)

La Ley 9036, Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), establece el marco de la política de desarrollo rural territorial y crea el INDER, aprobada el 11 de mayo del 2012. Es el resultado de un largo camino de maduración y evolución de políticas públicas agrarias y de la legislación en nuestro país, que se nutre de las fuentes que hemos explicado en estos antecedentes, como la experiencia europea, la americana, incluyendo la norteamericana, además de nuevos enfoques propiciados por agencias de desarrollo, adaptadas y modeladas por la propia experiencia nacional, nuestra historia y condiciones particulares y al reconocimiento de la existencia de una nueva ruralidad en el país y en el mundo.

Para comprender el concepto de desarrollo rural que trae la nueva Ley, no basta con citar un artículo, pues se trata de un concepto complejo. A nuestro juicio se requiere de varias de las definiciones integradas en la Ley para comprender todo el alcance del concepto.

En primer lugar, tenemos la definición de multifuncionalidad del medio rural que nos permite comprender el ámbito de las actividades que comprenderán las actividades ligadas al desarrollo rural. Se define así:

Variado conjunto de funciones desempeñadas en el medio rural, en donde a sus contribuciones generadas con las actividades rurales agrarias y no agrarias (agroindustria, agronegocios, turismo y otros servicios) se suman hoy otras funciones esenciales para toda la sociedad, entre las que sobresalen la preservación de los recursos naturales, el suministro de servicios ambientales, el mejoramiento de los espacios y paisajes rurales y las diversas modalidades de gestión agroambiental. (Ley 9036, artículo 3, inciso 1, p.3)

A nuestro juicio se trata de una definición rica en contenido y aclara las actividades que comprende el desarrollo rural, a saber: las actividades agrarias y conexas a ellas como agroindustria, agronegocios, el turismo rural con un enfoque de mejoramiento de espacios y paisajes rurales y las actividades de carácter agroambiental incluidas los servicios ambientales.

Como criterios complementarios tendríamos las definiciones de actividad agraria y no agraria que se encuentra en el artículo 3 incisos a y b:

- a. Actividades agrarias: actividades productivas basadas en la utilización de recursos naturales: agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca y maricultura; b) Actividades no agrarias: actividades productivas, industriales, comerciales y de servicios existentes en el medio rural. (Ley 9036, p.2)

A esta definición tenemos que sumar otros elementos que deben caracterizar el desarrollo rural, al menos en nuestro país, como son el enfoque territorial y participativo de ese desarrollo tal y como lo define el inciso i) del mismo artículo 3, dirigidos a lograr competitividad, equidad y cohesión social.

Desarrollo rural territorial: proceso de cambio integral en materia económica, social, cultural e institucional, impulsado en un territorio rural, con la participación concertada y organizada de todos los actores sociales existentes en dicho territorio, orientado a la búsqueda de la competitividad, la equidad, el bienestar y la cohesión e identidad social de sus pobladores. (Ley 9036, artículo 3, inciso i, p.2)

No podemos olvidar la precisión que hace el artículo 3 sobre el tema de sostenibilidad, que recalca esa visión que es transversal al desarrollo rural, cuando define lo siguiente:

Conjunto de procesos económicos sociales e institucionales, continuos, progresivos y autónomos, efectuados en armonía con el ambiente, de manera tal que garanticen la satisfacción de las necesidades de las actuales generaciones, así como la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Comprende las actividades humanas orientadas a la conservación, recuperación, protección y uso adecuado de los recursos naturales mediante formas económicas, sociales y organizacionales en correspondencia con la dinámica propia del medio natural de los territorios rurales. (Ley 9036, artículo 3, inciso h, p.3)

Finalmente, en cuanto a la dimensión más política e institucional, tendríamos que sumar a esta definición el concepto de que el desarrollo rural con enfoque territorial es integral, lo que se entiende cómo:

Se concibe el desarrollo rural territorial como un proceso multidimensional y multisectorial que requiere la atención simultánea, a fin de evitar la ejecución de acciones aisladas o sin una misma orientación. (Ley 9036, artículo 3, inciso d, p.3)

De lo dicho hasta ahora podemos concluir que el concepto de desarrollo rural se plantea como:

Proceso de cambio integral en materia económica, social, cultural e institucional dirigido a la búsqueda de competitividad, equidad, bienestar, cohesión e identidad social, impulsado en un territorio rural, caracterizado por actividades productivas que se presentan en el medio rural, tanto de carácter agrario en sentido estricto y las conexas a ellas, como agroindustria, agronegocios, el turismo rural, con un enfoque de mejoramiento de espacios y servicios rurales y las actividades de carácter agroambiental, incluidas los servicios ambientales ejecutadas en forma sostenible, con una visión multidimensional. (Ley 9036, artículo 3, p.2)

Con esta definición así planteada, podremos en adelante tener más claridad acerca de lo que significa desarrollo rural, y su impacto en el objeto del Derecho Agrario, como una de sus nuevas dimensiones y en la competencia material de los Tribunales Agrarios, la cual le ha sido asignada por la propia Ley INDER y el Código Procesal Agrario.

Tanto el artículo 69 de la Ley 9036, como los artículos 1 y 2 del Código Procesal Agrario incluyen las actividades vinculadas al desarrollo rural, como parte de la competencia de los tribunales agrarios. Por ello es necesario precisar el alcance de esa competencia (la que a nuestro juicio incluiría las siguientes actividades), todas ellas derivadas de la propia Ley INDER:

La actividad productiva agraria, las conexas a ella como agroindustria, agronegocios, el turismo rural; las comerciales ligadas a ellas, de servicios existentes en el medio rural, todo ello con un enfoque de mejoramiento de espacios y paisajes rurales, la preservación de recursos naturales y las actividades de carácter agroambiental, incluidas los servicios ambientales, ejecutadas en forma sostenible, con una visión multidimensional. (Ley 9036, págs. 2-19)

Conclusiones

En el presente artículo hemos repasado la evolución del concepto de desarrollo rural, en diferentes momentos históricos y en diferentes latitudes. Hemos constatado que la relevancia del tema radica en el reconocimiento de que nuestras áreas rurales, hoy llamados territorios rurales, presentan asimetrías en relación con las zonas y territorios urbanos, que los dejan en condiciones de desigualdad y atraso. La responsabilidad de ese atraso no obedece a la pobreza intrínseca de los territorios rurales, pues objetivamente son ricos, diversos, dotados de recursos naturales y capacidades múltiples de sus pobladores.

Pareciera que ha influido en la diferenciación (aunque entendemos existen muchos factores) el modelo de producción capitalista que absorbe del campo las materias primas y la fuerza laboral, alrededor de conglomerados urbanos, lo que ha conducido incluso a fenómenos postmodernos como el despoblamiento de las zonas rurales. La lógica del sistema económico conduce a procesos de concentración de servicios en las zonas urbanas, aunque esto conlleve al deterioro en condiciones de vida.

Las políticas públicas y la normativa instrumentalizadora de esas políticas, ha pasado por diferentes estadios. En el CLM había una preocupación por recuperar el papel protagónico del campo en la sociedad norteamericana, apelando a políticas de innovación tecnológica ligadas a universidades, que chocaron con el modelo capitalista norteamericano que, en su afán de afianzar un modelo de producción industrial, formulan las teorías basadas en el concepto del núcleo de expansión capitalista, donde el campo es el eslabón tradicional y la ciudad con su desarrollo industrial el modelo de modernidad a seguir.

Como consecuencia de este enfoque, se formulan políticas anti agraristas, que ubican como motivos de atraso del campo la dedicación a actividades agrarias y con ello una desvalorización de lo que significa “ser campesino”. En la formación de la Unión Europea, se busca recuperar a través de la PAC, política agrícola común europea, el papel protagónico de la agricultura en la producción de alimentos y el valor de los servicios que brindan los territorios rurales. Para combatir la migración y el despoblamiento del campo se busca un desarrollo territorial equilibrado de la economía, incluyendo la creación y conservación del empleo.

La Unión Europea reconoce hoy dos pilares en su política pública: la actividad agraria y la dimensión de desarrollo rural sostenible. Como se indicaba anteriormente, el desarrollo rural al contrario de lo que pensaban los economistas de los años 60's y 70's, no puede dejar de tener la agricultura y sus actividades conexas y auxiliares como unos de los componentes más ricos de los territorios rurales. Además, es importante observar la evolución, de la dimensión ambiental, en la actividad agraria y de desarrollo rural cada vez más presente en las estrategias de la PAC.

Este es quizás uno de los mayores aportes del movimiento moderno de los derechos humanos expresado en las conferencias internacionales más recientes. La comprensión de que vivimos en una aldea global, y de que el impacto de nuestras actividades y el modelo económico dominante nos lleva al colapso civilizatorio, nos ha conducido lentamente a la formulación de la visión de desarrollo sostenible en sus dimensiones económica, social y ambiental, como única vía para sobrevivir como especie.

El impacto del concepto de desarrollo sostenible en la agricultura y en general en el mundo rural es mucho, tanto en lo que refiere a la transformación de sistemas productivos dirigidos a evitar el deterioro de nuestros recursos y la pérdida de diversidad, como en el reconocimiento del valor de los territorios rurales en el equilibrio de la vida en general. Ahora más que nunca, se acepta que la supervivencia de la humanidad pasa por valorar los espacios rurales, las actividades que en ellas se realizan y el papel de quienes las realizan. La pandemia ha puesto en evidencia la gran importancia de los sistemas alimentarios, de los que dependen las ciudades y hasta el valor de esos espacios en la salud mental de sus pobladores. Hoy presenciamos un retorno al campo a la vez que constatamos las limitaciones para albergar en estos territorios a quienes buscan el regreso, dado los niveles de atraso de muchas de estas zonas.

Por lo que, es importante comprender el concepto de desarrollo rural, las políticas públicas y la normativa que las instrumentalizan. La riqueza del concepto de desarrollo rural es fundamental para aplicar correctamente la política pública. Hoy entendemos que el desarrollo rural es un fenómeno multidimensional, que incorpora actividades productivas agrarias, conexas y auxiliares a ellas, así como otras actividades no agrarias, propias de la multifuncionalidad de los territorios rurales y de la cultura que en ellos se expresa. Esas actividades, repetimos, se desarrollan en un ámbito territorial determinado, con una cultura y ecosistemas que las determinan y que debe ser dirigidas conscientemente dentro de un enfoque de equidad intra e intergeneracional y preservación de nuestros espacios y bienes naturales, a la búsqueda del preciado equilibrio que garantice el derecho a la supervivencia de todas las especies en este planeta.

Referencias Bibliográficas

- Asamblea de Naciones Unidas. (16 de junio de 1972). *Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente humano*. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, llevado a cabo en Estocolmo, Suecia. Recuperado de <https://bit.ly/3AEVHQq>
- Asamblea de Naciones Unidas. (5 a 16 de junio de 1992). *Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo*. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, llevado a cabo en Estocolmo, Suecia.
- Calatrava, J. (mayo de 2017). *Desarrollo Rural: Origen y evolución de políticas*. Conferencia de Discurso de Investidura como Académico de Honor, Academia Andaluza de Ciencia Regional, Sevilla, España. Recuperado de <https://bit.ly/3snBUCZ>
- Cano, M. (2011). Modelo epistemológico de la teoría tridimensional del derecho. *Convergencia*, 18(57), 209-228. Recuperado de <https://bit.ly/3m3kJF0>
- Comisión Europea. (s.f). *Desarrollo Rural: la política agrícola común apoya la vitalidad y la viabilidad económica de las zonas rurales a través de financiación y acciones de apoyo al desarrollo rural*. Recuperado de <https://bit.ly/3fYru6P>
- Consejo Agropecuario Centroamericano. (2010). *Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial 2010-2030* [ECADERT]. San José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Recuperado de <https://bit.ly/37JstLP>
- Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura [IICA]. (2000). *Jóvenes y nueva ruralidad: protagonistas actuales y potenciales del cambio*. San José, Costa Rica: IICA, Dirección de Desarrollo Rural Sostenible.

- Lebel, G., y Kane, H. (1991). *El Desarrollo sostenible. Una guía sobre nuestro futuro común*. San José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura [IICA]. Recuperado de <https://bit.ly/3yObITs>
- Ley de Biodiversidad* No.7788. (27 de mayo de 1998). Asamblea Legislativa. San José, Costa Rica. Recuperado de <https://bit.ly/3AM40h7>
- Ley de transformación del IDA en Instituto de Desarrollo Rural* No.9036. (2012). La Gaceta. San José, Costa Rica. Recuperado de <https://bit.ly/3AGGcHD>
- Ley Forestal* No.7575. (16 de abril de 1996). Asamblea Legislativa. San José, Costa Rica. Recuperado de <https://bit.ly/2VWAN0v>
- Ley Orgánica del Ambiente* No.7554. (13 de noviembre de 1995). Asamblea Legislativa. San José, Costa Rica. Recuperado de <https://bit.ly/2Xr4grc>
- Müller, S. (1996). *Cómo medir la sostenibilidad. Una propuesta para el área de la agricultura y de los recursos naturales*. Serie documentos de discusión sobre agricultura sostenible y recursos naturales. San José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Recuperado de <https://bit.ly/2XtcuYr>
- Red Extremeña de Desarrollo Rural [Redex]. (s. f). *Concepto de Desarrollo Rural*. Recuperado de <https://bit.ly/3jTLvNd>
- Sepúlveda, S. (2008). *Metodología para estimar el nivel de desarrollo sostenible de territorios: biograma 2008*. San José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
- Voto 10450. (2013). Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
- Voto 3705. (1993). Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
- Voto 6222. (2010). Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
- Voto 6322. (1993). Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
- Voto 6922. (2010). Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
- Winograd, M. (1996). *Indicadores Ambientales para Latinoamérica y el Caribe. Hacia la sustentabilidad en el uso de las tierras*. San José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Recuperado de <https://bit.ly/2XvNO1D>
- Zeledón, R. (2015). *Derecho Agrario Contemporáneo*. San José, Costa Rica: Investigaciones Jurídicas.